

**Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica**

**ARTÍCULO ÚNICO**

Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882

Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, (SP/LEG/18523)	Ley de Enjuiciamiento Criminal TEXTO ANTERIOR (SP/LEG/2487)	Ley de Enjuiciamiento Criminal TEXTO POSTERIOR (SP/LEG/2487)
<p><b>Uno.</b> <i>Se modifica el art. 118, que queda redactado como sigue:</i></p>	<p><b>Artículo 118<sup>1</sup></b></p> <p>1. Toda persona a quien se <u>impute</u> un <u>acto</u> punible podrá ejercitar el derecho de defensa, <u>actuando en el procedimiento cualquiera que este sea</u>, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá, sin demora injustificada, de los siguientes derechos:</p> <p>a) Derecho a ser informado de los hechos que se le <u>imputan</u>, así como de cualquier cambio relevante en el objeto de la investigación y de los hechos imputados. Esta información será facilitada con el grado de detalle suficiente para permitir un ejercicio efectivo del derecho a la defensa.</p> <p>b) Derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el derecho de defensa.</p> <p>c) Derecho a designar libremente abogado, sin perjuicio de lo dispuesto <u>en la letra a)</u> del artículo 527.</p> <p>d) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla.</p> <p>e) Derecho a traducción e interpretación gratuitas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 a 127.</p> <p>f) Derecho a guardar silencio y a no prestar</p>	<p><b>Artículo 118</b></p> <p>1. Toda persona a quien se <b>atribuya</b> un <b>hecho</b> punible podrá ejercitar el derecho de defensa, <b>interviniendo en las actuaciones</b>, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá, sin demora injustificada, de los siguientes derechos:</p> <p>a) Derecho a ser informado de los hechos que se le <b>atribuyan</b>, así como de cualquier cambio relevante en el objeto de la investigación y de los hechos imputados. Esta información será facilitada con el grado de detalle suficiente para permitir el ejercicio efectivo del derecho de defensa.</p> <p>b) Derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el derecho de defensa <b>y en todo caso, con anterioridad a que se le tome declaración.</b></p> <p><b>c) Derecho a actuar en el proceso penal para ejercer su derecho de defensa de acuerdo con lo dispuesto en la ley.</b></p> <p><b>d) Derecho a designar libremente abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 a) del artículo 527.</b></p> <p>e) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla.</p> <p>f) Derecho a <b>la</b> traducción e interpretación gratuitas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 127.</p> <p><b>g) Derecho a guardar silencio y a no prestar</b></p>

<sup>1</sup> El texto de este artículo corresponde a la redacción dada por Ley Orgánica 5/2015, de 27 de Abril, con entrada en vigor a partir del 28 de octubre de 2015

	<p>declaración si no desea hacerlo.</p> <p>g) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.</p> <p>La información a que se refiere el párrafo anterior se facilitará en un lenguaje comprensible y que resulte accesible al imputado. A estos efectos se adaptará la información a su edad, grado de madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la que pueda derivar una modificación de la capacidad para entender el alcance de la información que se le facilita.</p> <p>2. Para actuar en el proceso, las personas <u>interesadas</u> deberán ser representadas por Procurador y defendidas por Abogado, designándoseles de oficio cuando no los hubiesen nombrado por sí mismos y lo solicitaren, y en todo caso, cuando no tuvieran aptitud legal para <u>verificarlo</u>.</p> <p>Si no hubiesen designado Procurador o Abogado, se les requerirá para que lo <u>verifiquen</u> o se les nombrará de oficio, si, requeridos, no los nombrasen, cuando la causa llegue a estado en que se necesite el consejo de aquellos o haya de intentar algún recurso que hiciese indispensable su actuación.</p>	<p>declaración si no desea hacerlo, <b>y a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen.</b></p> <p>h) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.</p> <p>La información a que se refiere este apartado se facilitará en un lenguaje comprensible y que resulte accesible. A estos efectos se adaptará la información a la edad del destinatario, su grado de madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la que pueda derivar una modificación de la capacidad para entender el alcance de la información que se le facilita.</p> <p><b>2. El derecho de defensa se ejercerá sin más limitaciones que las expresamente previstas en la ley desde la atribución del hecho punible investigado hasta la extinción de la pena.</b></p> <p><b>El derecho de defensa comprende la asistencia letrada de un abogado de libre designación o, en su defecto, de un abogado de oficio, con el que podrá comunicarse y entrevistarse reservadamente, incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527 y que estará presente en todas sus declaraciones así como en las diligencias de reconocimiento, careos y reconstrucción de hechos.</b></p> <p>3. Para actuar en el proceso, las personas <b>investigadas</b> deberán ser representadas por <u>procurador</u> y <u>defendidas</u> por abogado, designándoseles de oficio cuando no los hubiesen nombrado por sí mismos y lo solicitaren, y en todo caso, cuando no tuvieran aptitud legal para <b>hacerlo</b>.</p> <p>Si no hubiesen designado procurador o abogado, se les requerirá para que lo <b>hagan</b> o se les nombrará de oficio si, requeridos, no los nombrasen, cuando la causa llegue a estado en que se necesite el consejo de aquéllos o haya de intentar algún recurso que hiciese indispensable su actuación.</p> <p><b>4. Todas las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán carácter confidencial.</b></p> <p><b>Si estas conversaciones o comunicaciones hubieran sido captadas o intervenidas durante la ejecución de alguna de las diligencias reguladas en esta ley, el juez ordenará la eliminación de la grabación o la entrega al destinatario de la</b></p>
--	---	--

	<p>3. La admisión de denuncia o querrela y cualquier actuación procesal de la que resulte la imputación de un delito contra persona o personas determinadas, será puesta inmediatamente en conocimiento de los presuntamente responsables.</p>	<p><b>correspondencia detenida, dejando constancia de estas circunstancias en las actuaciones.</b></p> <p><b>Lo dispuesto en el párrafo primero no será de aplicación cuando se constate la existencia de indicios objetivos de la participación del abogado en el hecho delictivo investigado o de su implicación junto con el investigado o encausado en la comisión de otra infracción penal, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley General Penitenciaria.</b></p> <p>5. La admisión de denuncia o querrela, y cualquier actuación procesal de la que resulte la imputación de un delito contra persona o personas determinadas, serán puestas inmediatamente en conocimiento de los presuntamente responsables.</p>
<p><b>Dos.</b> <i>Se añaden dos nuevos apartados 6 y 7 al art. 282 bis, con la siguiente redacción:</i></p>	<p><b>Artículo 282 bis</b></p> <p>1. A los fines previstos en el artículo anterior y cuando se trate de investigaciones que afecten a actividades propias de la delincuencia organizada, el Juez de Instrucción competente o el Ministerio Fiscal dando cuenta inmediata al Juez, podrán autorizar a funcionarios de la Policía Judicial, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo de seis meses prorrogables por períodos de igual duración, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad.</p> <p>La resolución por la que se acuerde deberá consignar el nombre verdadero del agente y la identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto.</p> <p>La resolución será reservada y deberá conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad.</p> <p>La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento de quien autorizó la investigación. Asimismo, dicha información deberá aportarse al proceso en su integridad y se valorará en conciencia por el órgano judicial</p>	<p><b>Artículo 282 bis</b></p> <p>1. A los fines previstos en el artículo anterior y cuando se trate de investigaciones que afecten a actividades propias de la delincuencia organizada, el Juez de Instrucción competente o el Ministerio Fiscal dando cuenta inmediata al Juez, podrán autorizar a funcionarios de la Policía Judicial, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo de seis meses prorrogables por períodos de igual duración, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad.</p> <p>La resolución por la que se acuerde deberá consignar el nombre verdadero del agente y la identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto.</p> <p>La resolución será reservada y deberá conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad.</p> <p>La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento de quien autorizó la investigación. Asimismo, dicha información deberá aportarse al proceso en su integridad y se valorará en conciencia por el órgano judicial</p>

	<p>competente.</p> <p>2. Los funcionarios de la Policía Judicial que hubieran actuado en una investigación con identidad falsa de conformidad a lo previsto en el apartado 1, podrán mantener dicha identidad cuando testifiquen en el proceso que pudiera derivarse de los hechos en que hubieran intervenido y siempre que así se acuerde mediante resolución judicial motivada, siéndole también de aplicación lo previsto en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre.</p> <p>Ningún funcionario de la Policía Judicial podrá ser obligado a actuar como agente encubierto.</p> <p>3. Cuando las actuaciones de investigación puedan afectar a los derechos fundamentales, el agente encubierto deberá solicitar del órgano judicial competente las autorizaciones que, al respecto, establezca la Constitución y la Ley, así como cumplir las demás previsiones legales aplicables.</p> <p>4. A los efectos señalados en el apartado 1 de este artículo, se considerará como delincuencia organizada la asociación de tres o más personas para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de los delitos siguientes:</p> <p>a) Delitos de obtención, tráfico ilícito de órganos humanos y trasplante de los mismos, previstos en el artículo 156 bis del Código Penal.</p> <p>b) Delito de secuestro de personas previsto en los artículos 164 a 166 del Código Penal.</p> <p>c) Delito de trata de seres humanos previsto en el artículo 177 bis del Código Penal.</p> <p>d) Delitos relativos a la prostitución previstos en los artículos 187 a 189 del Código Penal.</p> <p>e) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico previstos en los artículos 237, 243, 244, 248 y 301 del Código Penal.</p> <p>f) Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270 a 277 del Código Penal.</p> <p>g) Delitos contra los derechos de los trabajadores previstos en los artículos 312 y 313 del Código Penal.</p> <p>h) Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros previstos en el artículo 318 bis del Código Penal.</p> <p>i) Delitos de tráfico de especies de flora o fauna amenazada previstos en los artículos 332 y 334 del Código Penal.</p> <p>j) Delito de tráfico de material nuclear y radiactivo previsto en el artículo 345 del Código Penal.</p>	<p>competente.</p> <p>2. Los funcionarios de la Policía Judicial que hubieran actuado en una investigación con identidad falsa de conformidad a lo previsto en el apartado 1, podrán mantener dicha identidad cuando testifiquen en el proceso que pudiera derivarse de los hechos en que hubieran intervenido y siempre que así se acuerde mediante resolución judicial motivada, siéndole también de aplicación lo previsto en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre.</p> <p>Ningún funcionario de la Policía Judicial podrá ser obligado a actuar como agente encubierto.</p> <p>3. Cuando las actuaciones de investigación puedan afectar a los derechos fundamentales, el agente encubierto deberá solicitar del órgano judicial competente las autorizaciones que, al respecto, establezca la Constitución y la Ley, así como cumplir las demás previsiones legales aplicables.</p> <p>4. A los efectos señalados en el apartado 1 de este artículo, se considerará como delincuencia organizada la asociación de tres o más personas para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de los delitos siguientes:</p> <p>a) Delitos de obtención, tráfico ilícito de órganos humanos y trasplante de los mismos, previstos en el artículo 156 bis del Código Penal.</p> <p>b) Delito de secuestro de personas previsto en los artículos 164 a 166 del Código Penal.</p> <p>c) Delito de trata de seres humanos previsto en el artículo 177 bis del Código Penal.</p> <p>d) Delitos relativos a la prostitución previstos en los artículos 187 a 189 del Código Penal.</p> <p>e) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico previstos en los artículos 237, 243, 244, 248 y 301 del Código Penal.</p> <p>f) Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270 a 277 del Código Penal.</p> <p>g) Delitos contra los derechos de los trabajadores previstos en los artículos 312 y 313 del Código Penal.</p> <p>h) Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros previstos en el artículo 318 bis del Código Penal.</p> <p>i) Delitos de tráfico de especies de flora o fauna amenazada previstos en los artículos 332 y 334 del Código Penal.</p> <p>j) Delito de tráfico de material nuclear y radiactivo previsto en el artículo 345 del Código Penal.</p>
--	--	--

	<p>k) Delitos contra la salud pública previstos en los artículos 368 a 373 del Código Penal.</p> <p>l) Delitos de falsificación de moneda, previsto en el artículo 386 del Código Penal, y de falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 bis del Código Penal.</p> <p>m) Delito de tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos previsto en los artículos 566 a 568 del Código Penal.</p> <p>n) Delitos de terrorismo previstos en los artículos 572 a 578 del Código Penal.</p> <p>o) Delitos contra el patrimonio histórico previstos en el artículo 2.1.e de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.</p> <p>5. El agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación al delito.</p> <p>Para poder proceder penalmente contra el mismo por las actuaciones realizadas a los fines de la investigación, el Juez competente para conocer la causa deberá, tan pronto tenga conocimiento de la actuación de algún agente encubierto en la misma, requerir informe relativo a tal circunstancia de quien hubiere autorizado la identidad supuesta, en atención al cual resolverá lo que a su criterio proceda.</p>	<p>k) Delitos contra la salud pública previstos en los artículos 368 a 373 del Código Penal.</p> <p>l) Delitos de falsificación de moneda, previsto en el artículo 386 del Código Penal, y de falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 bis del Código Penal.</p> <p>m) Delito de tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos previsto en los artículos 566 a 568 del Código Penal.</p> <p>n) Delitos de terrorismo previstos en los artículos 572 a 578 del Código Penal.</p> <p>o) Delitos contra el patrimonio histórico previstos en el artículo 2.1.e de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.</p> <p>5. El agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación al delito.</p> <p>Para poder proceder penalmente contra el mismo por las actuaciones realizadas a los fines de la investigación, el Juez competente para conocer la causa deberá, tan pronto tenga conocimiento de la actuación de algún agente encubierto en la misma, requerir informe relativo a tal circunstancia de quien hubiere autorizado la identidad supuesta, en atención al cual resolverá lo que a su criterio proceda.</p> <p><b>6. El juez de instrucción podrá autorizar a funcionarios de la Policía Judicial para actuar bajo identidad supuesta en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación con el fin de esclarecer alguno de los delitos a los que se refiere el apartado 4 de este artículo o cualquier delito de los previstos en el artículo 588 ter a.</b></p> <p><b>El agente encubierto informático, con autorización específica para ello, podrá intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos por razón de su contenido y analizar los resultados de los algoritmos aplicados para la identificación de dichos archivos ilícitos.</b></p> <p><b>7. En el curso de una investigación llevada a cabo mediante agente encubierto, el juez competente podrá autorizar la obtención de imágenes y la grabación de las conversaciones que puedan mantenerse en los encuentros previstos entre el agente y el investigado, aun cuando se desarrollen en el interior de un domicilio.</b></p>
--	---	---

<p><b>Tres.</b> Se modifican los aptdos. 1 y 2 y se introduce un nuevo aptdo. 4 al art. 509, que quedan redactados como sigue:</p>	<p><b>Artículo 509</b></p> <p>1. El Juez de Instrucción o tribunal podrá acordar excepcionalmente la detención o prisión incomunicadas <u>para evitar que se sustraigan a la acción de la justicia personas supuestamente implicadas en los hechos investigados, que éstas puedan actuar contra bienes jurídicos de la víctima, que se oculten, alteren o destruyan pruebas relacionadas con su comisión, o que se cometan nuevos hechos delictivos.</u></p> <p>2. La incomunicación durará el tiempo estrictamente necesario para practicar con urgencia diligencias tendentes a evitar los peligros a que se refiere el apartado anterior. La incomunicación no podrá extenderse más allá de cinco días. En los casos en que la prisión se acuerde en causa por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 384 bis u otros delitos cometidos concertadamente y de forma organizada por dos o más personas, la incomunicación podrá prorrogarse por otro plazo no superior a cinco días. <u>No obstante, en estos mismos casos, el juez o tribunal que conozca de la causa podrá mandar que vuelva a quedar incomunicado el preso, aun después de haber sido puesto en comunicación, siempre que el desenvolvimiento ulterior de la investigación o de la causa ofreciese méritos para ello. Esta segunda incomunicación no excederá en ningún caso de tres días.</u></p> <p>3. El auto en el que sea acordada la incomunicación o, en su caso, su prórroga deberá expresar los motivos por los que haya sido adoptada la medida.</p>	<p><b>Artículo 509</b></p> <p>1. El juez de instrucción o tribunal podrá acordar excepcionalmente, <b>mediante resolución motivada</b>, la detención o prisión incomunicadas <b>cuando concorra alguna de las siguientes circunstancias:</b></p> <p><b>a) necesidad urgente de evitar graves consecuencias que puedan poner en peligro la vida, la libertad o la integridad física de una persona, o</b></p> <p><b>b) necesidad urgente de una actuación inmediata de los jueces de instrucción para evitar comprometer de modo grave el proceso penal.</b></p> <p>2. La incomunicación durará el tiempo estrictamente necesario para practicar con urgencia diligencias tendentes a evitar los peligros a que se refiere el apartado anterior. La incomunicación no podrá extenderse más allá de cinco días. En los casos en que la prisión se acuerde en causa por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 384 bis u otros delitos cometidos concertadamente y de forma organizada por dos o más personas, la incomunicación podrá prorrogarse por otro plazo no superior a cinco días.</p> <p>3. El auto en el que sea acordada la incomunicación o, en su caso, su prórroga deberá expresar los motivos por los que haya sido adoptada la medida.</p> <p><b>4. En ningún caso podrán ser objeto de detención incomunicada los menores de dieciséis años.</b></p>
<p><b>Cuatro.</b> Se da nueva redacción a los aptdos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del art. 520 y se</p>	<p><b>Artículo 520<sup>2</sup></b></p> <p>1. La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su</p>	<p><b>Artículo 520</b></p> <p>1. La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su</p>

<sup>2</sup> El texto de este artículo corresponde a la redacción dada por Ley Orgánica 5/2015, de 27 de Abril, con entrada en vigor a partir del 28-10-2015

<p><i>introducen nuevos aptdos. 2 bis, 7 y 8 en ese mismo precepto, que tendrán el siguiente contenido:</i></p>	<p>perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio.</p> <p>La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los plazos establecidos en la presente Ley, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.</p> <p>2. Toda persona detenida o presa será informada por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le <u>imputan</u> y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:</p> <p>a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que solo declarará ante el Juez.</p> <p>b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.</p> <p>c) Derecho a designar <u>Abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en las diligencias de reconocimiento en rueda de que sea objeto. Si el detenido o preso no designara Abogado, se procederá a la designación de oficio.</u></p> <p>d) Derecho <u>de acceso</u> a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.</p> <p>e) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el hecho de la detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la <u>Oficina</u></p>	<p>perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio. <b>Quienes acuerden la medida y los encargados de practicarla así como de los traslados ulteriores, velarán por los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de aquéllos, con respeto al derecho fundamental a la libertad de información.</b></p> <p>La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los plazos establecidos en la presente Ley, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.</p> <p><b>En el atestado deberá reflejarse el lugar y la hora de la detención y de la puesta a disposición de la autoridad judicial o en su caso, de la puesta en libertad.</b></p> <p>2. Toda persona detenida o presa será informada por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le <u>atribuyan</u> y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:</p> <p>a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el juez.</p> <p>b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.</p> <p>c) Derecho a designar <u>abogado</u>, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.a) del artículo 527 y a ser asistido por él sin demora injustificada. En caso de que, debido a la lejanía geográfica no sea posible de inmediato la asistencia de letrado, se facilitará al detenido comunicación telefónica o por videoconferencia con aquél, salvo que dicha comunicación sea imposible.</p> <p>d) Derecho <b>a acceder</b> a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.</p> <p>e) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, <b>sin demora injustificada, su privación de libertad</b> y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias</p>
---	---	---

	<p><u>Consular de su país.</u></p> <p><b>f)</b> Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la actuación de que se trate, o de personas sordas o con discapacidad auditiva, así como de otras personas con dificultades del lenguaje.</p> <p><b>g)</b> Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.</p> <p><b>h)</b> Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla.</p> <p>Asimismo, se le informará del plazo máximo legal de duración de la detención hasta la puesta a disposición de la autoridad judicial y del procedimiento por medio del cual puede impugnar la legalidad de su detención.</p> <p>Cuando no se disponga de una declaración de derechos en una lengua que comprenda el detenido, se le informará de sus derechos por medio de un intérprete tan pronto resulte posible. En este caso, deberá entregársele, posteriormente y sin demora indebida, la declaración escrita de derechos en una lengua que comprenda.</p> <p>En todos los casos se permitirá al detenido conservar en su poder la declaración escrita de derechos durante todo el tiempo de la detención.</p> <p>2 bis. La información a que se refiere el apartado anterior se facilitará en un lenguaje comprensible y que resulte accesible al imputado. A estos efectos se adaptará la información a su edad, grado de madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la que pueda derivar una limitación de la capacidad para</p>	<p>anteriores se comuniquen a la oficina consular de su país.</p> <p><b>f) Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un tercero de su elección. Esta comunicación se celebrará en presencia de un funcionario de policía o, en su caso, del funcionario que designen el juez o el fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527.</b></p> <p><b>g) Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a comunicarse y a mantener correspondencia con ellas.</b></p> <p><b>h)</b> Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la actuación de que se trate, o de personas sordas o con discapacidad auditiva, así como de otras personas con dificultades del lenguaje.</p> <p><b>i)</b> Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.</p> <p><b>j)</b> Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla.</p> <p>Asimismo, se le informará del plazo máximo legal de duración de la detención hasta la puesta a disposición de la autoridad judicial y del procedimiento por medio del cual puede impugnar la legalidad de su detención.</p> <p>Cuando no se disponga de una declaración de derechos en una lengua que comprenda el detenido, se le informará de sus derechos por medio de un intérprete tan pronto resulte posible. En este caso, deberá entregársele, posteriormente y sin demora indebida, la declaración escrita de derechos en una lengua que comprenda.</p> <p>En todos los casos se permitirá al detenido conservar en su poder la declaración escrita de derechos durante todo el tiempo de la detención.</p> <p>2 bis. La información a que se refiere el apartado anterior se facilitará en un lenguaje comprensible y que resulte accesible al destinatario. A estos efectos se adaptará la información a su edad, grado de madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la que pueda derivar una limitación de la capacidad para</p>
--	--	---



	<p>entender el alcance de la información que se le facilita.</p> <p><u>3. Si se tratare de un menor de edad o persona con la capacidad judicialmente complementada, la autoridad bajo cuya custodia se encuentre el detenido o preso notificará las circunstancias de la letra e) del apartado 2 a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del mismo y, si no fueran halladas, se dará cuenta inmediatamente al Ministerio Fiscal. Si el detenido menor o con capacidad judicialmente complementada fuera extranjero, el hecho de la detención se notificará de oficio al Cónsul de su país.</u></p> <p><u>4. La autoridad judicial y los funcionarios bajo cuya custodia se encuentre el detenido o preso, se abstendrán de hacerle recomendaciones sobre la elección de Abogado y comunicarán en forma que permita su constancia al Colegio de Abogados el nombre del Abogado elegido por aquél para su asistencia o petición de que se le designe de oficio. El Colegio de Abogados notificará al designado dicha elección, a fin de que manifieste su aceptación o renuncia. En caso de que el designado no aceptare el referido encargo, no fuera hallado o no compareciere, el Colegio de Abogados procederá al nombramiento de un Abogado de oficio. El Abogado designado acudirá al centro de detención a la mayor brevedad y en todo caso, en el plazo máximo de ocho horas, contadas desde el momento de la comunicación al referido Colegio.</u></p> <p>Si transcurrido el plazo de ocho horas de la</p>	<p>entender el alcance de la información que se le facilita.</p> <p><b>3. Si el detenido fuere extranjero, se comunicará al cónsul de su país el hecho de su detención y el lugar de custodia y se le permitirá la comunicación con la autoridad consular. En caso de que el detenido tenga dos o más nacionalidades, podrá elegir a qué autoridades consulares debe informarse de que se encuentra privado de libertad y con quién desea comunicarse.</b></p> <p><b>4. Si se tratare de un menor, será puesto a disposición de las Secciones de Menores de la Fiscalía y se comunicará el hecho y el lugar de custodia a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del mismo, tan pronto se tenga constancia de la minoría de edad.</b></p> <p>En caso de conflicto de intereses con quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del menor, se le nombrará un defensor judicial a quien se pondrá en conocimiento del hecho y del lugar de detención.</p> <p>Si el detenido tuviere su capacidad modificada judicialmente, la información prevista en el apartado 2 de este artículo se comunicará a quienes ejerzan la tutela o guarda de hecho del mismo, dando cuenta al Ministerio Fiscal.</p> <p>Si el detenido menor o con capacidad modificada judicialmente fuera extranjero, el hecho de la detención se notificará de oficio al Cónsul de su país.</p> <p><b>5. El detenido designará libremente abogado y si no lo hace será asistido por un abogado de oficio. Ninguna autoridad o agente le efectuará recomendación alguna sobre el abogado a designar más allá de informarle de su derecho.</b></p> <p>La autoridad que tenga bajo su custodia al detenido comunicará inmediatamente al Colegio de Abogados el nombre del designado por el detenido para asistirle a los efectos de su localización y transmisión del encargo profesional o, en su caso, le comunicará la petición de nombramiento de abogado de oficio.</p> <p>Si el detenido no hubiere designado abogado, o el elegido rehusare el encargo o no fuere hallado, el Colegio de Abogados procederá de inmediato al nombramiento de un abogado del turno de oficio.</p> <p>El abogado designado acudirá al centro de</p>
--	--	--

	<p><u>comunicación realizada al Colegio de Abogados, no compareciese injustificadamente Letrado alguno en el lugar donde el detenido o preso se encuentre, podrá procederse a la práctica de la declaración o del reconocimiento de aquél, si lo consintiere, sin perjuicio de las responsabilidades contraídas en caso de incumplimiento de sus obligaciones por parte de los Abogados designados.</u></p>	<p>detención con la máxima premura, siempre dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo. Si en dicho plazo no compareciera, el Colegio de Abogados designará un nuevo abogado del turno de oficio que deberá comparecer a la mayor brevedad y siempre dentro del plazo indicado, sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad disciplinaria en que haya podido incurrir el incompareciente.</p> <p>6. La asistencia del abogado consistirá en:</p> <p>a) Solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de los derechos establecidos en el apartado 2 y que se proceda, si fuera necesario, al reconocimiento médico señalado en su letra i).</p> <p>b) Intervenir en las diligencias de declaración del detenido, en las diligencias de reconocimiento de que sea objeto y en las de reconstrucción de los hechos en que participe el detenido. El abogado podrá solicitar al juez o funcionario que hubiesen practicado la diligencia en la que haya intervenido, una vez terminada ésta, la declaración o ampliación de los extremos que considere convenientes, así como la consignación en el acta de cualquier incidencia que haya tenido lugar durante su práctica.</p> <p>c) Informar al detenido de las consecuencias de la prestación o denegación de consentimiento a la práctica de diligencias que se le soliciten.</p> <p>Si el detenido se opusiera a la recogida de las muestras mediante frotis bucal, conforme a las previsiones de la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, el juez de instrucción, a instancia de la Policía Judicial o del Ministerio Fiscal, podrá imponer la ejecución forzosa de tal diligencia mediante el recurso a las medidas coactivas mínimas indispensables, que deberán ser proporcionadas a las circunstancias del caso y respetuosas con su dignidad.</p> <p>d) Entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527.</p> <p>7. Las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán carácter confidencial en los mismos términos y con</p>
--	---	--

	<p>5. No obstante, el detenido o preso podrá renunciar a la preceptiva asistencia de <u>Abogado</u> si su detención lo fuere por hechos susceptibles de ser tipificados exclusivamente como delitos contra la seguridad del tráfico, siempre que se le haya facilitado información clara y suficiente en un lenguaje sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las consecuencias de la renuncia. El detenido podrá revocar su renuncia en cualquier momento.</p>	<p>las mismas excepciones previstas en el apartado 4 del artículo 118.</p> <p>8. No obstante, el detenido o preso podrá renunciar a la preceptiva asistencia de abogado si su detención lo fuere por hechos susceptibles de ser tipificados exclusivamente como delitos contra la seguridad del tráfico, siempre que se le haya facilitado información clara y suficiente en un lenguaje sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las consecuencias de la renuncia. El detenido podrá revocar su renuncia en cualquier momento.</p>
<p><b>Cinco.</b> Se introduce un nuevo art. 520 ter con la siguiente redacción:</p>		<p><b>Artículo 520 ter</b></p> <p>A los detenidos en espacios marinos por la presunta comisión de los delitos contemplados en el artículo 23.4.d) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, les serán aplicados los derechos reconocidos en el presente capítulo en la medida que resulten compatibles con los medios personales y materiales existentes a bordo del buque o aeronave que practique la detención, debiendo ser puestos en libertad o a disposición de la autoridad judicial competente tan pronto como sea posible, sin que pueda exceder del plazo máximo de setenta y dos horas. La puesta a disposición judicial podrá realizarse por los medios telemáticos de los que disponga el buque o aeronave, cuando por razón de la distancia o su situación de aislamiento no sea posible llevar a los detenidos a presencia física de la autoridad judicial dentro del indicado plazo.</p>
<p><b>Seis.</b> Se modifica el art. 527, que tendrá la siguiente redacción:</p>	<p><b>Artículo 527</b></p> <p><u>El detenido o preso, mientras se halle incomunicado, no podrá disfrutar de los derechos expresados en el presente capítulo, con excepción de los establecidos en el artículo 520, con las siguientes modificaciones:</u></p> <p>a) <u>En todo caso, su Abogado será designado de oficio.</u></p> <p>b) <u>No tendrá derecho a la comunicación prevista en el apartado d) del número 2.</u></p> <p>c) <u>Tampoco tendrá derecho a la entrevista con su Abogado prevista en el apartado c) del número 6.</u></p>	<p><b>Artículo 527</b></p> <p>1. En los supuestos del artículo 509, el detenido o preso podrá ser privado de los siguientes derechos si así lo justifican las circunstancias del caso:</p> <p>a) Designar un abogado de su confianza.</p> <p>b) Comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo, salvo con la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y el Médico Forense.</p> <p>c) Entrevistarse reservadamente con su abogado.</p> <p>d) Acceder él o su abogado a las actuaciones, salvo a los elementos esenciales para poder impugnar la</p>

		<p>legalidad de la detención.</p> <p>2. La incomunicación o restricción de otro derecho del apartado anterior será acordada por auto. Cuando la restricción de derechos sea solicitada por la Policía Judicial o por el Ministerio Fiscal se entenderán acordadas las medidas previstas por el apartado 1 que hayan sido instadas por un plazo máximo de veinticuatro horas, dentro del cual el juez habrá de pronunciarse sobre la solicitud, así como sobre la pertinencia de acordar el secreto de las actuaciones. La incomunicación y la aplicación al detenido o preso de alguna de las excepciones referidas en el apartado anterior será acordada por auto debiéndose motivar las razones que justifican la adopción de cada una de las excepciones al régimen general de conformidad con lo dispuesto en el artículo 509.</p> <p>El juez controlará efectivamente las condiciones en que se desarrolle la incomunicación, a cuyo efecto podrá requerir información a fin de constatar el estado del detenido o preso y el respeto a sus derechos.</p> <p>3. Los reconocimientos médicos al detenido a quien se le restrinja el derecho a comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo se realizarán con una frecuencia de al menos dos reconocimientos cada veinticuatro horas, según criterio facultativo.</p>
<p><b>Siete.</b> Se modifica la rúbrica del Título VIII del Libro II, que queda redactado del siguiente modo:</p>	<p><b>TÍTULO VIII</b> <u>De la entrada y registro en lugar cerrado, del de libros y papeles y de la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica</u></p>	<p><b>TÍTULO VIII</b> <b>De las medidas de investigación limitativas de los derechos reconocidos en el artículo 18 de la Constitución</b></p>
<p><b>Ocho.</b> Los arts. 545 a 572 se agrupan en un nuevo Capítulo I, del Título VIII, del Libro II, cuya rúbrica es la siguiente:</p>		<p><b>CAPÍTULO I</b> <b>De la entrada y registro en lugar cerrado</b></p>
<p><b>Nueve.</b> Los arts. 573 a 578 se agrupan en un nuevo Capítulo II, del Título VIII del Libro II, cuya rúbrica es la siguiente:</p>		<p><b>CAPÍTULO II</b> <b>Del registro de libros y papeles</b></p>

<p><b>Diez.</b> Los arts. 579 a 588 se agrupan en un nuevo Capítulo III, del Título VIII, del Libro II, con la rúbrica siguiente:</p>		<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO III</b></p> <p style="text-align: center;"><b>De la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica</b></p>
<p><b>Once.</b> Se modifica el art. 579, que quedará redactado del siguiente modo:</p>	<p><b>Artículo 579</b></p> <p>1. Podrá el Juez acordar la detención de la correspondencia privada, postal y telegráfica que el <u>procesado remitiere o recibiere</u> y su apertura y examen, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia <u>importante de la causa</u>.</p> <p>2. <u>Asimismo, el Juez podrá acordar, en resolución motivada, la intervención de las comunicaciones telefónicas del procesado, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa.</u></p> <p>3. <u>De igual forma,</u> el Juez podrá acordar, en resolución motivada, por un plazo de hasta tres meses, prorrogable por iguales períodos, la observación de las comunicaciones postales, telegráficas o <u>telefónicas de las personas sobre las que existan indicios de responsabilidad criminal,</u> así como de las comunicaciones de las que se sirvan para la realización de sus fines delictivos.</p> <p>4. En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos relacionados con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas <u>o rebeldes, la medida prevista en el número 3 de este artículo</u> podrá ordenarla el Ministro del Interior o, en su defecto, el <u>Director de la Seguridad del Estado, comunicándolo inmediatamente por escrito motivado</u> al Juez competente, <u>quien,</u> también de forma motivada, revocará o confirmará tal <u>resolución</u> en un plazo</p>	<p><b>Artículo 579. De la correspondencia escrita o telegráfica.</b></p> <p>1. El juez podrá acordar la detención de la correspondencia privada, postal y telegráfica, <b>incluidos faxes, burofaxes y giros,</b> que el <b>investigado remita o reciba, así como</b> su apertura o examen, si hubiera indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación del algún hecho o circunstancia <b>relevante para</b> la causa, <b>siempre que la investigación tenga por objeto alguno de los siguientes delitos:</b></p> <p><b>1.º Delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de, al menos, tres años de prisión.</b></p> <p><b>2.º Delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal.</b></p> <p><b>3.º Delitos de terrorismo.</b></p> <p>2. El juez podrá acordar, en resolución motivada, por un plazo de hasta tres meses, prorrogable por iguales o inferiores períodos <b>hasta un máximo de dieciocho meses,</b> la observación de las comunicaciones postales y telegráficas <b>del investigado,</b> así como de las comunicaciones de las que se sirva para la realización de sus fines delictivos.</p> <p>3. En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos relacionados con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas <b>y existan razones fundadas que hagan imprescindible la medida prevista en los apartados anteriores de este artículo,</b> podrá ordenarla el Ministro del Interior o, en su defecto, el <b>Secretario de Estado</b> de Seguridad. <b>Esta medida se comunicará inmediatamente al juez competente y, en todo caso, dentro del plazo máximo de</b></p>

	<p>máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada <u>la observación</u>.</p>	<p><b>veinticuatro horas, haciendo constar las razones que justificaron la adopción de la medida, la actuación realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado.</b> El juez competente, también de forma motivada, revocará o confirmará tal <b>actuación</b> en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada <b>la medida</b>.</p> <p><b>4. No se requerirá autorización judicial en los siguientes casos:</b></p> <p>a) Envíos postales que, por sus propias características externas, no sean usualmente utilizados para contener correspondencia individual sino para servir al transporte y tráfico de mercancías o en cuyo exterior se haga constar su contenido.</p> <p>b) Aquellas otras formas de envío de la correspondencia bajo el formato legal de comunicación abierta, en las que resulte obligatoria una declaración externa de contenido o que incorporen la indicación expresa de que se autoriza su inspección.</p> <p>c) Cuando la inspección se lleve a cabo de acuerdo con la normativa aduanera o proceda con arreglo a las normas postales que regulan una determinada clase de envío.</p> <p><b>5. La solicitud y las actuaciones posteriores relativas a la medida solicitada se sustanciarán en una pieza separada y secreta, sin necesidad de que se acuerde expresamente el secreto de la causa.</b></p>
<p><b>Doce.</b> Se crea un nuevo art. 579 bis, que quedará redactado del siguiente modo:</p>		<p><b>Artículo 579 bis. Utilización de la información obtenida en un procedimiento distinto y descubrimientos casuales.</b></p> <p><b>1. El resultado de la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica podrá ser utilizado como medio de investigación o prueba en otro proceso penal.</b></p> <p><b>2. A tal efecto, se procederá a la deducción de testimonio de los particulares necesarios para acreditar la legitimidad de la injerencia. Se incluirán entre los antecedentes indispensables, en todo caso, la solicitud inicial para la adopción, la resolución judicial que la acuerda y todas las peticiones y resoluciones judiciales de prórroga recaídas en el procedimiento de origen.</b></p> <p><b>3. La continuación de esta medida para la investigación del delito casualmente descubierto requiere autorización del juez</b></p>

		<p>competente, para la cual, éste comprobará la diligencia de la actuación, evaluando el marco en el que se produjo el hallazgo casual y la imposibilidad de haber solicitado la medida que lo incluyera en su momento. Asimismo se informará si las diligencias continúan declaradas secretas, a los efectos de que tal declaración sea respetada en el otro proceso penal, comunicando el momento en el que dicho secreto se alce.</p>
<p><b>Trece.</b> <i>Se crea en el Título VIII del Libro II un nuevo Capítulo IV con la siguiente rúbrica y contenido:</i></p>		<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO IV</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Disposiciones comunes a la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos, la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de la imagen, el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información y los registros remotos sobre equipos informáticos</b></p> <p><b>Artículo 588 bis a. Principios rectores.</b></p> <p>1. Durante la instrucción de las causas se podrá acordar alguna de las medidas de investigación reguladas en el presente capítulo siempre que medie autorización judicial dictada con plena sujeción a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida.</p> <p>2. El principio de especialidad exige que una medida esté relacionada con la investigación de un delito concreto. No podrán autorizarse medidas de investigación tecnológica que tengan por objeto prevenir o descubrir delitos o despejar sospechas sin base objetiva.</p> <p>3. El principio de idoneidad servirá para definir el ámbito objetivo y subjetivo y la duración de la medida en virtud de su utilidad.</p> <p>4. En aplicación de los principios de excepcionalidad y necesidad solo podrá acordarse la medida:</p> <p>a) cuando no estén a disposición de la investigación, en atención a sus características, otras medidas menos gravosas para los derechos fundamentales del investigado o encausado e igualmente útiles para el esclarecimiento del hecho, o</p> <p>b) cuando el descubrimiento o la</p>

	<p>comprobación del hecho investigado, la determinación de su autor o autores, la averiguación de su paradero, o la localización de los efectos del delito se vea gravemente dificultada sin el recurso a esta medida.</p> <p>5. Las medidas de investigación reguladas en este capítulo solo se reputarán proporcionadas cuando, tomadas en consideración todas las circunstancias del caso, el sacrificio de los derechos e intereses afectados no sea superior al beneficio que de su adopción resulte para el interés público y de terceros. Para la ponderación de los intereses en conflicto, la valoración del interés público se basará en la gravedad del hecho, su trascendencia social o el ámbito tecnológico de producción, la intensidad de los indicios existentes y la relevancia del resultado perseguido con la restricción del derecho.</p> <p><b>Artículo 588 bis b. Solicitud de autorización judicial.</b></p> <p>1. El juez podrá acordar las medidas reguladas en este capítulo de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la Policía Judicial.</p> <p>2. Cuando el Ministerio Fiscal o la Policía Judicial soliciten del juez de instrucción una medida de investigación tecnológica, la petición habrá de contener:</p> <p>1.º La descripción del hecho objeto de investigación y la identidad del investigado o de cualquier otro afectado por la medida, siempre que tales datos resulten conocidos.</p> <p>2.º La exposición detallada de las razones que justifiquen la necesidad de la medida de acuerdo a los principios rectores establecidos en el artículo 588 bis a, así como los indicios de criminalidad que se hayan puesto de manifiesto durante la investigación previa a la solicitud de autorización del acto de injerencia.</p> <p>3.º Los datos de identificación del investigado o encausado y, en su caso, de los medios de comunicación empleados que permitan la ejecución de la medida.</p> <p>4.º La extensión de la medida con especificación de su contenido.</p> <p>5.º La unidad investigadora de la Policía Judicial que se hará cargo de la intervención.</p> <p>6.º La forma de ejecución de la medida.</p>
--	---



	<p><b>7.º</b> La duración de la medida que se solicita.</p> <p><b>8.º</b> El sujeto obligado que llevará a cabo la medida, en caso de conocerse.</p> <p><b>Artículo 588 bis c. Resolución judicial.</b></p> <p><b>1.</b> El juez de instrucción autorizará o denegará la medida solicitada mediante auto motivado, oído el Ministerio Fiscal. Esta resolución se dictará en el plazo máximo de veinticuatro horas desde que se presente la solicitud.</p> <p><b>2.</b> Siempre que resulte necesario para resolver sobre el cumplimiento de alguno de los requisitos expresados en los artículos anteriores, el juez podrá requerir, con interrupción del plazo a que se refiere el apartado anterior, una ampliación o aclaración de los términos de la solicitud.</p> <p><b>3.</b> La resolución judicial que autorice la medida concretará al menos los siguientes extremos:</p> <p>a) El hecho punible objeto de investigación y su calificación jurídica, con expresión de los indicios racionales en los que funde la medida.</p> <p>b) La identidad de los investigados y de cualquier otro afectado por la medida, de ser conocido.</p> <p>c) La extensión de la medida de injerencia, especificando su alcance así como la motivación relativa al cumplimiento de los principios rectores establecidos en el artículo 588 bis a.</p> <p>d) La unidad investigadora de Policía Judicial que se hará cargo de la intervención.</p> <p>e) La duración de la medida.</p> <p>f) La forma y la periodicidad con la que el solicitante informará al juez sobre los resultados de la medida.</p> <p>g) La finalidad perseguida con la medida.</p> <p>h) El sujeto obligado que llevará a cabo la medida, en caso de conocerse, con expresa mención del deber de colaboración y de guardar secreto, cuando proceda, bajo apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia.</p>
--	--

	<p><b>Artículo 588 bis d. Secreto.</b></p> <p>La solicitud y las actuaciones posteriores relativas a la medida solicitada se sustanciarán en una pieza separada y secreta, sin necesidad de que se acuerde expresamente el secreto de la causa.</p> <p><b>Artículo 588 bis e. Duración.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Las medidas reguladas en el presente capítulo tendrán la duración que se especifique para cada una de ellas y no podrán exceder del tiempo imprescindible para el esclarecimiento de los hechos.</li><li>2. La medida podrá ser prorrogada, mediante auto motivado, por el juez competente, de oficio o previa petición razonada del solicitante, siempre que subsistan las causas que la motivaron.</li><li>3. Transcurrido el plazo por el que resultó concedida la medida, sin haberse acordado su prórroga, o, en su caso, finalizada ésta, cesará a todos los efectos.</li></ol> <p><b>Artículo 588 bis f. Solicitud de prórroga.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. La solicitud de prórroga se dirigirá por el Ministerio Fiscal o la Policía Judicial al juez competente con la antelación suficiente a la expiración del plazo concedido. Deberá incluir en todo caso:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Un informe detallado del resultado de la medida.</li><li>b) Las razones que justifiquen la continuación de la misma.</li></ol></li><li>2. En el plazo de los dos días siguientes a la presentación de la solicitud, el juez resolverá sobre el fin de la medida o su prórroga mediante auto motivado. Antes de dictar la resolución podrá solicitar aclaraciones o mayor información.</li><li>3. Concedida la prórroga, su cómputo se iniciará desde la fecha de expiración del plazo de la medida acordada.</li></ol> <p><b>Artículo 588 bis g. Control de la medida.</b></p> <p>La Policía Judicial informará al juez de instrucción del desarrollo y los resultados de la medida, en la forma y con la periodicidad que este determine y, en todo caso, cuando por cualquier causa se ponga fin a la misma.</p>
--	---

		<p>Artículo 588 bis h. Afectación de terceras personas.</p> <p>Podrán acordarse las medidas de investigación reguladas en los siguientes capítulos aun cuando afecten a terceras personas en los casos y con las condiciones que se regulan en las disposiciones específicas de cada una de ellas.</p> <p>Artículo 588 bis i. Utilización de la información obtenida en un procedimiento distinto y descubrimientos casuales.</p> <p>El uso de las informaciones obtenidas en un procedimiento distinto y los descubrimientos casuales se regularan con arreglo a lo dispuesto en el artículo 579 bis.</p> <p>Artículo 588 bis j. Cese de la medida.</p> <p>El juez acordará el cese de la medida cuando desaparezcan las circunstancias que justificaron su adopción o resulte evidente que a través de la misma no se están obteniendo los resultados pretendidos, y, en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo para el que hubiera sido autorizada.</p> <p>Artículo 588 bis k. Destrucción de registros.</p> <p>1. Una vez que se ponga término al procedimiento mediante resolución firme, se ordenará el borrado y eliminación de los registros originales que puedan constar en los sistemas electrónicos e informáticos utilizados en la ejecución de la medida. Se conservará una copia bajo custodia del secretario judicial.</p> <p>2. Se acordará la destrucción de las copias conservadas cuando hayan transcurrido cinco años desde que la pena se haya ejecutado o cuando el delito o la pena hayan prescrito o se haya decretado el sobreseimiento libre o haya recaído sentencia absolutoria firme respecto del investigado, siempre que no fuera precisa su conservación a juicio del Tribunal.</p> <p>3. Los tribunales dictarán las órdenes oportunas a la Policía Judicial para que lleve a efecto la destrucción contemplada en los anteriores apartados.</p>
<p><b>Catorce.</b> <i>Se crea en el Título</i></p>		<p><b>CAPÍTULO V</b> <b>La interceptación de las comunicaciones</b></p>

*VIII del Libro II un nuevo Capítulo V con la siguiente rúbrica y contenido:*

**telefónicas y telemáticas**

**Sección 1.ª Disposiciones generales**

**Artículo 588 ter a. Presupuestos.**

La autorización para la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas solo podrá ser concedida cuando la investigación tenga por objeto alguno de los delitos a que se refiere el artículo 579.1 de esta ley o delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la comunicación o servicio de comunicación.

**Artículo 588 ter b. Ámbito.**

1. Los terminales o medios de comunicación objeto de intervención han de ser aquellos habitual u ocasionalmente utilizados por el investigado.

2. La intervención judicialmente acordada podrá autorizar el acceso al contenido de las comunicaciones y a los datos electrónicos de tráfico o asociados al proceso de comunicación, así como a los que se produzcan con independencia del establecimiento o no de una concreta comunicación, en los que participe el sujeto investigado, ya sea como emisor o como receptor, y podrá afectar a los terminales o los medios de comunicación de los que el investigado sea titular o usuario.

También podrán intervenir los terminales o medios de comunicación de la víctima cuando sea previsible un grave riesgo para su vida o integridad.

A los efectos previstos en este artículo, se entenderá por datos electrónicos de tráfico o asociados todos aquellos que se generan como consecuencia de la conducción de la comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas, de su puesta a disposición del usuario, así como de la prestación de un servicio de la sociedad de la información o comunicación telemática de naturaleza análoga.

**Artículo 588 ter c. Afectación a tercero.**

Podrá acordarse la intervención judicial de las comunicaciones emitidas desde terminales o medios de comunicación telemática pertenecientes a una tercera persona siempre que:

1.º exista constancia de que el sujeto

	<p>investigado se sirve de aquella para transmitir o recibir información, o</p> <p>2.º el titular colabore con la persona investigada en sus fines ilícitos o se beneficie de su actividad.</p> <p>También podrá autorizarse dicha intervención cuando el dispositivo objeto de investigación sea utilizado maliciosamente por terceros por vía telemática, sin conocimiento de su titular. Artículo 588 ter d. Solicitud de autorización judicial.</p> <p>1. La solicitud de autorización judicial deberá contener, además de los requisitos mencionados en el artículo 588 bis b, los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) la identificación del número de abonado, del terminal o de la etiqueta técnica,</li><li>b) la identificación de la conexión objeto de la intervención o</li><li>c) los datos necesarios para identificar el medio de telecomunicación de que se trate.</li></ul> <p>2. Para determinar la extensión de la medida, la solicitud de autorización judicial podrá tener por objeto alguno de los siguientes extremos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) El registro y la grabación del contenido de la comunicación, con indicación de la forma o tipo de comunicaciones a las que afecta.</li><li>b) El conocimiento de su origen o destino, en el momento en el que la comunicación se realiza.</li><li>c) La localización geográfica del origen o destino de la comunicación.</li><li>d) El conocimiento de otros datos de tráfico asociados o no asociados pero de valor añadido a la comunicación. En este caso, la solicitud especificará los datos concretos que han de ser obtenidos.</li></ul> <p>3. En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos relacionados con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas y existan razones fundadas que hagan imprescindible la medida prevista en los apartados anteriores de este artículo, podrá ordenarla el Ministro del Interior o, en su defecto, el Secretario de Estado de Seguridad. Esta medida se comunicará</p>
--	---

	<p>inmediatamente al juez competente y, en todo caso, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, haciendo constar las razones que justificaron la adopción de la medida, la actuación realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado. El juez competente, también de forma motivada, revocará o confirmará tal actuación en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la medida.</p> <p><b>Artículo 588 ter e. Deber de colaboración.</b></p> <p>1. Todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones, de acceso a una red de telecomunicaciones o de servicios de la sociedad de la información, así como toda persona que de cualquier modo contribuya a facilitar las comunicaciones a través del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicación telemática, lógica o virtual, están obligados a prestar al juez, al Ministerio Fiscal y a los agentes de la Policía Judicial designados para la práctica de la medida la asistencia y colaboración precisas para facilitar el cumplimiento de los autos de intervención de las telecomunicaciones.</p> <p>2. Los sujetos requeridos para prestar colaboración tendrán la obligación de guardar secreto acerca de las actividades requeridas por las autoridades.</p> <p>3. Los sujetos obligados que incumplieren los anteriores deberes podrán incurrir en delito de desobediencia.</p> <p><b>Artículo 588 ter f. Control de la medida.</b></p> <p>En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 588 bis g, la Policía Judicial pondrá a disposición del juez, con la periodicidad que este determine y en soportes digitales distintos, la transcripción de los pasajes que considere de interés y las grabaciones íntegras realizadas. Se indicará el origen y destino de cada una de ellas y se asegurará, mediante un sistema de sellado o firma electrónica avanzado o sistema de adveración suficientemente fiable, la autenticidad e integridad de la información volcada desde el ordenador central a los soportes digitales en que las comunicaciones hubieran sido grabadas.</p> <p><b>Artículo 588 ter g. Duración.</b></p> <p>La duración máxima inicial de la intervención, que se computará desde la</p>
--	--

	<p>fecha de autorización judicial, será de tres meses, prorrogables por períodos sucesivos de igual duración hasta el plazo máximo de dieciocho meses.</p> <p><b>Artículo 588 ter h. Solicitud de prórroga.</b></p> <p>Para la fundamentación de la solicitud de la prórroga, la Policía Judicial aportará, en su caso, la transcripción de aquellos pasajes de las conversaciones de las que se deduzcan informaciones relevantes para decidir sobre el mantenimiento de la medida.</p> <p>Antes de dictar la resolución, el juez podrá solicitar aclaraciones o mayor información, incluido el contenido íntegro de las conversaciones intervenidas.</p> <p><b>Artículo 588 ter i. Acceso de las partes a las grabaciones.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Alzado el secreto y expirada la vigencia de la medida de intervención, se entregará a las partes copia de las grabaciones y de las transcripciones realizadas. Si en la grabación hubiera datos referidos a aspectos de la vida íntima de las personas, solo se entregará la grabación y transcripción de aquellas partes que no se refieran a ellos. La no inclusión de la totalidad de la grabación en la transcripción entregada se hará constar de modo expreso.</li><li>2. Una vez examinadas las grabaciones y en el plazo fijado por el juez, en atención al volumen de la información contenida en los soportes, cualquiera de las partes podrá solicitar la inclusión en las copias de aquellas comunicaciones que entienda relevantes y hayan sido excluidas. El juez de instrucción, oídas o examinadas por sí esas comunicaciones, decidirá sobre su exclusión o incorporación a la causa.</li><li>3. Se notificará por el juez de instrucción a las personas intervinientes en las comunicaciones interceptadas el hecho de la práctica de la injerencia y se les informará de las concretas comunicaciones en las que haya participado que resulten afectadas, salvo que sea imposible, exija un esfuerzo desproporcionado o puedan perjudicar futuras investigaciones. Si la persona notificada lo solicita se le entregará copia de la grabación o transcripción de tales comunicaciones, en la medida que esto no afecte al derecho a la intimidad de otras personas o resulte</li></ol>
--	---

	<p>contrario a los fines del proceso en cuyo marco se hubiere adoptado la medida de injerencia.</p> <p><b>Sección 2.ª Incorporación al proceso de datos electrónicos de tráfico o asociados</b></p> <p><b>Artículo 588 ter j. Datos obrantes en archivos automatizados de los prestadores de servicios.</b></p> <p>1. Los datos electrónicos conservados por los prestadores de servicios o personas que faciliten la comunicación en cumplimiento de la legislación sobre retención de datos relativos a las comunicaciones electrónicas o por propia iniciativa por motivos comerciales o de otra índole y que se encuentren vinculados a procesos de comunicación, solo podrán ser cedidos para su incorporación al proceso con autorización judicial.</p> <p>2. Cuando el conocimiento de esos datos resulte indispensable para la investigación, se solicitará del juez competente autorización para recabar la información que conste en los archivos automatizados de los prestadores de servicios, incluida la búsqueda entrecruzada o inteligente de datos, siempre que se precisen la naturaleza de los datos que hayan de ser conocidos y las razones que justifican la cesión.</p> <p><b>Sección 3.ª Acceso a los datos necesarios para la identificación de usuarios, terminales y dispositivos de conectividad</b></p> <p><b>Artículo 588 ter k. Identificación mediante número IP.</b></p> <p>Cuando en el ejercicio de las funciones de prevención y descubrimiento de los delitos cometidos en internet, los agentes de la Policía Judicial tuvieran acceso a una dirección IP que estuviera siendo utilizada para la comisión algún delito y no constara la identificación y localización del equipo o del dispositivo de conectividad correspondiente ni los datos de identificación personal del usuario, solicitarán del juez de instrucción que requiera de los agentes sujetos al deber de colaboración según el artículo 588 ter e, la cesión de los datos que permitan la identificación y localización del terminal o del dispositivo de conectividad y la identificación del sospechoso.</p>
--	---



	<p><b>Artículo 588 ter l. Identificación de los terminales mediante captación de códigos de identificación del aparato o de sus componentes.</b></p> <p>1. Siempre que en el marco de una investigación no hubiera sido posible obtener un determinado número de abonado y este resulte indispensable a los fines de la investigación, los agentes de Policía Judicial podrán valerse de artificios técnicos que permitan acceder al conocimiento de los códigos de identificación o etiquetas técnicas del aparato de telecomunicación o de alguno de sus componentes, tales como la numeración IMSI o IMEI y, en general, de cualquier medio técnico que, de acuerdo con el estado de la tecnología, sea apto para identificar el equipo de comunicación utilizado o la tarjeta utilizada para acceder a la red de telecomunicaciones.</p> <p>2. Una vez obtenidos los códigos que permiten la identificación del aparato o de alguno de sus componentes, los agentes de la Policía Judicial podrán solicitar del juez competente la intervención de las comunicaciones en los términos establecidos en el artículo 588 ter d. La solicitud habrá de poner en conocimiento del órgano jurisdiccional la utilización de los artificios a que se refiere el apartado anterior.</p> <p>El tribunal dictará resolución motivada concediendo o denegando la solicitud de intervención en el plazo establecido en el artículo 588 bis c.</p> <p><b>Artículo 588 ter m. Identificación de titulares o terminales o dispositivos de conectividad.</b></p> <p>Cuando, en el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Fiscal o la Policía Judicial necesiten conocer la titularidad de un número de teléfono o de cualquier otro medio de comunicación, o, en sentido inverso, precisen el número de teléfono o los datos identificativos de cualquier medio de comunicación, podrán dirigirse directamente a los prestadores de servicios de telecomunicaciones, de acceso a una red de telecomunicaciones o de servicios de la sociedad de la información, quienes estarán obligados a cumplir el requerimiento, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia.</p>
--	--

<p><b>Quince.</b> <i>Se incorpora en el Título VIII del Libro II un nuevo Capítulo VI con la siguiente rúbrica y contenido:</i></p>		<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO VI</b></p> <p><b>Captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos</b></p> <p><b>Artículo 588 quater a. Grabación de las comunicaciones orales directas.</b></p> <p>1. Podrá autorizarse la colocación y utilización de dispositivos electrónicos que permitan la captación y grabación de las comunicaciones orales directas que se mantengan por el investigado, en la vía pública o en otro espacio abierto, en su domicilio o en cualesquiera otros lugares cerrados.</p> <p>Los dispositivos de escucha y grabación podrán ser colocados tanto en el exterior como en el interior del domicilio o lugar cerrado.</p> <p>2. En el supuesto en que fuera necesaria la entrada en el domicilio o en alguno de los espacios destinados al ejercicio de la privacidad, la resolución habilitante habrá de extender su motivación a la procedencia del acceso a dichos lugares.</p> <p>3. La escucha y grabación de las conversaciones privadas se podrá complementar con la obtención de imágenes cuando expresamente lo autorice la resolución judicial que la acuerde.</p> <p><b>Artículo 588 quater b. Presupuestos.</b></p> <p>1. La utilización de los dispositivos a que se refiere el artículo anterior ha de estar vinculada a comunicaciones que puedan tener lugar en uno o varios encuentros concretos del investigado con otras personas y sobre cuya previsibilidad haya indicios puestos de manifiesto por la investigación.</p> <p>2. Solo podrá autorizarse cuando concurren los requisitos siguientes:</p> <p>a) Que los hechos que estén siendo investigados sean constitutivos de alguno de los siguientes delitos:</p> <p>1.º Delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de, al menos, tres años de prisión.</p> <p>2.º Delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal.</p>
---	--	---

		<p><b>3.º Delitos de terrorismo.</b></p> <p>b) Que pueda racionalmente preverse que la utilización de los dispositivos aportará datos esenciales y de relevancia probatoria para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de su autor.</p> <p><b>Artículo 588 quater c. Contenido de la resolución judicial.</b></p> <p>La resolución judicial que autorice la medida, deberá contener, además de las exigencias reguladas en el artículo 588 bis c, una mención concreta al lugar o dependencias, así como a los encuentros del investigado que van a ser sometidos a vigilancia.</p> <p><b>Artículo 588 quater d. Control de la medida.</b></p> <p>En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 588 bis g, la Policía Judicial pondrá a disposición de la autoridad judicial el soporte original o copia electrónica auténtica de las grabaciones e imágenes, que deberá ir acompañado de una transcripción de las conversaciones que considere de interés.</p> <p>El informe identificará a todos los agentes que hayan participado en la ejecución y seguimiento de la medida.</p> <p><b>Artículo 588 quater e. Cese.</b></p> <p>Cesada la medida por alguna de las causas previstas en el artículo 588 bis j, la grabación de conversaciones que puedan tener lugar en otros encuentros o la captación de imágenes de tales momentos exigirán una nueva autorización judicial.</p>
<p><b>Dieciséis.</b> Se añade en el Título VIII del Libro II un nuevo Capítulo VII con la siguiente rúbrica y contenido:</p>		<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO VII</b> <b>Utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y de localización</b></p> <p><b>Artículo 588 quinquies a. Captación de imágenes en lugares o espacios públicos.</b></p> <p><b>1. La Policía Judicial podrá obtener y grabar por cualquier medio técnico imágenes de la persona investigada cuando se encuentre en un lugar o espacio público, si ello fuera necesario para facilitar su identificación, para localizar los instrumentos o efectos</b></p>

	<p>del delito u obtener datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos.</p> <p>2. La medida podrá ser llevada a cabo aun cuando afecte a personas diferentes del investigado, siempre que de otro modo se reduzca de forma relevante la utilidad de la vigilancia o existan indicios fundados de la relación de dichas personas con el investigado y los hechos objeto de la investigación.</p> <p><b>Artículo 588 quinquies b. Utilización de dispositivos o medios técnicos de seguimiento y localización.</b></p> <p>1. Cuando concurren acreditadas razones de necesidad y la medida resulte proporcionada, el juez competente podrá autorizar la utilización de dispositivos o medios técnicos de seguimiento y localización.</p> <p>2. La autorización deberá especificar el medio técnico que va a ser utilizado.</p> <p>3. Los prestadores, agentes y personas a que se refiere el artículo 588 ter e están obligados a prestar al juez, al Ministerio Fiscal y a los agentes de la Policía Judicial designados para la práctica de la medida la asistencia y colaboración precisas para facilitar el cumplimiento de los autos por los que se ordene el seguimiento, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia.</p> <p>4. Cuando concurren razones de urgencia que hagan razonablemente temer que de no colocarse inmediatamente el dispositivo o medio técnico de seguimiento y localización se frustrará la investigación, la Policía Judicial podrá proceder a su colocación, dando cuenta a la mayor brevedad posible, y en todo caso en el plazo máximo de veinticuatro horas, a la autoridad judicial, quien podrá ratificar la medida adoptada o acordar su inmediato cese en el mismo plazo. En este último supuesto, la información obtenida a partir del dispositivo colocado carecerá de efectos en el proceso.</p> <p><b>Artículo 588 quinquies c. Duración de la medida.</b></p> <p>1. La medida de utilización de dispositivos técnicos de seguimiento y localización prevista en el artículo anterior tendrá una duración máxima de tres meses a partir de la fecha de su autorización.</p>
--	--

		<p>Excepcionalmente, el juez podrá acordar prórrogas sucesivas por el mismo o inferior plazo hasta un máximo de dieciocho meses, si así estuviera justificado a la vista de los resultados obtenidos con la medida.</p> <p>2. La Policía Judicial entregará al juez los soportes originales o copias electrónicas auténticas que contengan la información recogida cuando éste se lo solicite y, en todo caso, cuando terminen las investigaciones.</p> <p>3. La información obtenida a través de los dispositivos técnicos de seguimiento y localización a los que se refieren los artículos anteriores deberá ser debidamente custodiada para evitar su utilización indebida.</p>
<p><b>Diecisiete.</b> Se crea en el Título III del Libro II un nuevo Capítulo VIII con la siguiente rúbrica y contenido:</p>		<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO VIII</b> <b>Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información</b></p> <p><b>Artículo 588 sexies a. Necesidad de motivación individualizada.</b></p> <p>1. Cuando con ocasión de la práctica de un registro domiciliario sea previsible la aprehensión de ordenadores, instrumentos de comunicación telefónica o telemática o dispositivos de almacenamiento masivo de información digital o el acceso a repositorios telemáticos de datos, la resolución del juez de instrucción habrá de extender su razonamiento a la justificación, en su caso, de las razones que legitiman el acceso de los agentes facultados a la información contenida en tales dispositivos.</p> <p>2. La simple incautación de cualquiera de los dispositivos a los que se refiere el apartado anterior, practicada durante el transcurso de la diligencia de registro domiciliario, no legitima el acceso a su contenido, sin perjuicio de que dicho acceso pueda ser autorizado ulteriormente por el juez competente.</p> <p><b>Artículo 588 sexies b. Acceso a la información de dispositivos electrónicos incautados fuera del domicilio del investigado.</b></p> <p>La exigencia prevista en el apartado 1 del artículo anterior será también aplicable a aquellos casos en los que los ordenadores, instrumentos de comunicación o dispositivos de almacenamiento masivo de</p>

	<p>datos, o el acceso a repositorios telemáticos de datos, sean aprehendidos con independencia de un registro domiciliario. En tales casos, los agentes pondrán en conocimiento del juez la incautación de tales efectos. Si éste considera indispensable el acceso a la información albergada en su contenido, otorgará la correspondiente autorización.</p> <p><b>Artículo 588 sexies c. Autorización judicial.</b></p> <p>1. La resolución del juez de instrucción mediante la que se autorice el acceso a la información contenida en los dispositivos a que se refiere la presente sección, fijará los términos y el alcance del registro y podrá autorizar la realización de copias de los datos informáticos. Fijará también las condiciones necesarias para asegurar la integridad de los datos y las garantías de su preservación para hacer posible, en su caso, la práctica de un dictamen pericial.</p> <p>2. Salvo que constituyan el objeto o instrumento del delito o existan otras razones que lo justifiquen, se evitará la incautación de los soportes físicos que contengan los datos o archivos informáticos, cuando ello pueda causar un grave perjuicio a su titular o propietario y sea posible la obtención de una copia de ellos en condiciones que garanticen la autenticidad e integridad de los datos.</p> <p>3. Cuando quienes lleven a cabo el registro o tengan acceso al sistema de información o a una parte del mismo conforme a lo dispuesto en este capítulo, tengan razones fundadas para considerar que los datos buscados están almacenados en otro sistema informático o en una parte de él, podrán ampliar el registro, siempre que los datos sean lícitamente accesibles por medio del sistema inicial o estén disponibles para este. Esta ampliación del registro deberá ser autorizada por el juez, salvo que ya lo hubiera sido en la autorización inicial. En caso de urgencia, la Policía Judicial o el fiscal podrán llevarlo a cabo, informando al juez inmediatamente, y en todo caso dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, de la actuación realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado. El juez competente, también de forma motivada, revocará o confirmará tal actuación en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la interceptación.</p> <p>4. En los casos de urgencia en que se aprecie un interés constitucional legítimo</p>
--	--

		<p>que haga imprescindible la medida prevista en los apartados anteriores de este artículo, la Policía Judicial podrá llevar a cabo el examen directo de los datos contenidos en el dispositivo incautado, comunicándolo inmediatamente, y en todo caso dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, por escrito motivado al juez competente, haciendo constar las razones que justificaron la adopción de la medida, la actuación realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado. El juez competente, también de forma motivada, revocará o confirmará tal actuación en un plazo máximo de 72 horas desde que fue ordenada la medida.</p> <p>5. Las autoridades y agentes encargados de la investigación podrán ordenar a cualquier persona que conozca el funcionamiento del sistema informático o las medidas aplicadas para proteger los datos informáticos contenidos en el mismo que facilite la información que resulte necesaria, siempre que de ello no derive una carga desproporcionada para el afectado, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia.</p> <p>Esta disposición no será aplicable al investigado o encausado, a las personas que están dispensadas de la obligación de declarar por razón de parentesco y a aquellas que, de conformidad con el artículo 416.2, no pueden declarar en virtud del secreto profesional.</p>
<p><b>Dieciocho.</b> <i>Se incorpora en el Título VIII del Libro II un nuevo Capítulo IX, con la siguiente rúbrica y contenido:</i></p>		<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO IX</b> <b>Registros remotos sobre equipos informáticos</b></p> <p><b>Artículo 588 septies a. Presupuestos.</b></p> <p>1. El juez competente podrá autorizar la utilización de datos de identificación y códigos, así como la instalación de un software, que permitan, de forma remota y telemática, el examen a distancia y sin conocimiento de su titular o usuario del contenido de un ordenador, dispositivo electrónico, sistema informático, instrumento de almacenamiento masivo de datos informáticos o base de datos, siempre que persiga la investigación de alguno de los siguientes delitos:</p> <p>a) Delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales.</p> <p>b) Delitos de terrorismo.</p>

	<p>c) Delitos cometidos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente.</p> <p>d) Delitos contra la Constitución, de traición y relativos a la defensa nacional.</p> <p>e) Delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la telecomunicación o servicio de comunicación.</p> <p>2. La resolución judicial que autorice el registro deberá especificar:</p> <p>a) Los ordenadores, dispositivos electrónicos, sistemas informáticos o parte de los mismos, medios informáticos de almacenamiento de datos o bases de datos, datos u otros contenidos digitales objeto de la medida.</p> <p>b) El alcance de la misma, la forma en la que se procederá al acceso y aprehensión de los datos o archivos informáticos relevantes para la causa y el software mediante el que se ejecutará el control de la información.</p> <p>c) Los agentes autorizados para la ejecución de la medida.</p> <p>d) La autorización, en su caso, para la realización y conservación de copias de los datos informáticos.</p> <p>e) Las medidas precisas para la preservación de la integridad de los datos almacenados, así como para la inaccesibilidad o supresión de dichos datos del sistema informático al que se ha tenido acceso.</p> <p>3. Cuando los agentes que lleven a cabo el registro remoto tengan razones para creer que los datos buscados están almacenados en otro sistema informático o en una parte del mismo, pondrán este hecho en conocimiento del juez, quien podrá autorizar una ampliación de los términos del registro.</p> <p>Artículo 588 septies b. Deber de colaboración.</p> <p>1. Los prestadores de servicios y personas señaladas en el artículo 588 ter e y los titulares o responsables del sistema informático o base de datos objeto del registro están obligados a facilitar a los agentes investigadores la colaboración</p>
--	---



		<p>precisa para la práctica de la medida y el acceso al sistema. Asimismo, están obligados a facilitar la asistencia necesaria para que los datos e información recogidos puedan ser objeto de examen y visualización.</p> <p>2. Las autoridades y los agentes encargados de la investigación podrán ordenar a cualquier persona que conozca el funcionamiento del sistema informático o las medidas aplicadas para proteger los datos informáticos contenidos en el mismo que facilite la información que resulte necesaria para el buen fin de la diligencia. Esta disposición no será aplicable al investigado o encausado, a las personas que están dispensadas de la obligación de declarar por razón de parentesco, y a aquellas que, de conformidad con el artículo 416.2, no pueden declarar en virtud del secreto profesional.</p> <p>3. Los sujetos requeridos para prestar colaboración tendrán la obligación de guardar secreto acerca de las actividades requeridas por las autoridades.</p> <p>4. Los sujetos mencionados en los apartados 1 y 2 de este artículo quedarán sujetos a la responsabilidad regulada en el apartado 3 del artículo 588 ter e.</p> <p>Artículo 588 septies c. Duración.</p> <p>La medida tendrá una duración máxima de un mes, prorrogable por iguales periodos hasta un máximo de tres meses.</p>
<p><b>Diecinueve.</b> Se crea en el Título VIII del Libro II un nuevo Capítulo X con la siguiente rúbrica y contenido:</p>		<p><b>CAPÍTULO X</b> <b>Medidas de aseguramiento</b></p> <p>Artículo 588 octies. Orden de conservación de datos.</p> <p>El Ministerio Fiscal o la Policía Judicial podrán requerir a cualquier persona física o jurídica la conservación y protección de datos o informaciones concretas incluidas en un sistema informático de almacenamiento que se encuentren a su disposición hasta que se obtenga la autorización judicial correspondiente para su cesión con arreglo a lo dispuesto en los artículos precedentes.</p> <p>Los datos se conservarán durante un periodo máximo de noventa días, prorrogable una sola vez hasta que se autorice la cesión o se cumplan ciento</p>

		<p>ochenta días.</p> <p>El requerido vendrá obligado a prestar su colaboración y a guardar secreto del desarrollo de esta diligencia, quedando sujeto a la responsabilidad descrita en el apartado-3 del artículo 588 ter e.</p>
<p><b>Veinte.</b> Se modifica el apartado 1 del artículo 967, que queda redactado del siguiente modo:</p>	<p><b>Artículo 967</b></p> <p>1. En las citaciones que se efectúen al denunciante, al ofendido o perjudicado y al imputado para la celebración del juicio, se les informará de que pueden ser asistidos por abogado si lo desean y de que deberán acudir al juicio con los medios de prueba de que intenten valerse. A la citación del imputado se acompañará copia de la querrela o de la denuncia que se haya presentado.</p> <p>(...)</p>	<p><b>Artículo 967</b></p> <p>1. En las citaciones que se efectúen al denunciante, al ofendido o perjudicado y al investigado para la celebración del juicio, se les informará de que pueden ser asistidos por abogado si lo desean y de que deberán acudir al juicio con los medios de prueba de que intenten valerse. A la citación del investigado se acompañará copia de la querrela o de la denuncia que se haya presentado.</p> <p>Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para el enjuiciamiento de delitos leves que lleven aparejada pena de multa cuyo límite máximo sea de al menos seis meses, se aplicarán las reglas generales de defensa y representación.</p> <p>(...)</p>
<p><b>Veintiuno.</b> Sustitución de términos.</p> <p>1. En los artículos 120, 309 bis, 760, 771, 775, 779, 797 y 798, el sustantivo «imputado» se sustituye por «investigado», en singular o plural según corresponda.</p> <p>2. En los artículos 325, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 511, 529, 530, 539, 544 ter, 764, 765, 766 y 773, el sustantivo «imputado» se sustituye por «investigado o encausado», en singular o plural según corresponda.</p> <p>3. En el artículo 141 la expresión «imputados o procesados» se sustituye por «investigados o encausados».</p> <p>4. En los artículos 762, 780 y 784, el sustantivo «imputado» se sustituye por «encausado», en singular o plural según corresponda.</p> <p>5. En los artículos 503 y 797 el adjetivo «imputada» se sustituye por «investigada».</p>		
<p><b>Disposición Derogatoria Única</b> Quedan derogados los artículos 387 y 395 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta ley</p>	<p><b>Artículo 387</b></p> <p><u>No se exigirá juramento a los procesados, exhortándoles solamente a decir verdad y advirtiéndoles el Juez de instrucción que deben responder de una manera precisa, clara y conforme a la verdad a las preguntas que les fueren hechas.</u></p> <p><b>Artículo 395</b></p> <p><u>El procesado no podrá, a pretexto de incompetencia del Juez, excusarse de</u></p>	<p><b>Artículo 387</b></p> <p>(Derogado)</p> <p><b>Artículo 395</b></p> <p>(Derogado)</p>

	<u>contestar a las preguntas que se le dirijan, si bien podrá protestar la incompetencia, consignándose así en los autos.</u>	
<b>DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA</b> Sustitución de referencias		
<p><b>Las disposiciones contenidas en otros textos legales que se refieran a la intervención de las comunicaciones telefónicas o telemáticas previstas en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se tendrán por referenciadas a lo dispuesto en el Título VIII del Libro II de dicha ley.</b></p>		
<b>DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA</b> Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial		
<b>Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre (SP/LEG/18523)</b>	<b>Ley Orgánica del Poder Judicial</b> <b>Texto anterior</b> (SP/LEG/2015)	<b>Ley Orgánica del Poder Judicial</b> <b>Texto posterior</b> (SP/LEG/2015)
<p><b>Uno.</b> <i>Se añade un nuevo numeral 5.º al apartado 1 del artículo 57.</i></p>	<p><b>Artículo 57.</b></p> <p>1. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá:</p> <p>1.º De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal que establezca la ley.</p> <p>2.º De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, así como de las causas que, en su caso, determinen los Estatutos de Autonomía.</p> <p>3.º De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia.</p>	<p><b>Artículo 57</b></p> <p>1. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá:</p> <p>1.º De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal que establezca la ley.</p> <p>2.º De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, así como de las causas que, en su caso, determinen los Estatutos de Autonomía.</p> <p>3.º De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia.</p>

	<p>4.º De los demás asuntos que le atribuya esta Ley.</p> <p>(...)</p>	<p>4.º De los demás asuntos que le atribuya esta Ley.</p> <p><b>5.º De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.</b></p> <p>(...)</p>
<p><b>Dos.</b> <i>Se añade un nuevo numeral 7.º al artículo 65, que sustituye al actual que pasa a ser el numeral 8.º:</i></p>	<p><b>Artículo 65.</b></p> <p>La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá:</p> <p>(...)</p> <p>6.º De los recursos contra las resoluciones dictadas por los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria de conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta.</p> <p>7.º De cualquier otro asunto que le atribuyan las leyes.</p>	<p><b>Artículo 65.</b></p> <p>La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá:</p> <p>(...)</p> <p>6.º De los recursos contra las resoluciones dictadas por los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria de conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta.</p> <p><b>7.º De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.</b></p> <p>8.º De cualquier otro asunto que le atribuyan las leyes.</p>
<p><b>Tres.</b> <i>Tres. Se añade una nueva letra e) al apartado 3 del artículo 73, con la siguiente redacción:</i></p>	<p><b>Artículo 73.</b></p> <p>1. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocerá, como Sala de lo Civil:</p> <p>a) Del recurso de casación que establezca la ley contra resoluciones de órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma, siempre que el recurso se funde en infracción de normas del derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución.</p> <p>b) Del recurso extraordinario de revisión que establezca la ley contra sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma, en materia de derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad autónoma, si el correspondiente Estatuto de Autonomía ha previsto esta atribución.</p> <p>c) De las funciones de apoyo y control del arbitraje que se establezcan en la ley, así como de las peticiones de exequátur de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo acordado en</p>	<p><b>Artículo 73</b></p> <p>1. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocerá, como Sala de lo Civil:</p> <p>a) Del recurso de casación que establezca la ley contra resoluciones de órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma, siempre que el recurso se funde en infracción de normas del derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución.</p> <p>b) Del recurso extraordinario de revisión que establezca la ley contra sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma, en materia de derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad autónoma, si el correspondiente Estatuto de Autonomía ha previsto esta atribución.</p> <p>c) De las funciones de apoyo y control del arbitraje que se establezcan en la ley, así como de las peticiones de exequátur de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo acordado en</p>

	<p>los tratados o las normas de la Unión Europea, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal.</p> <p>2. Esta Sala conocerá igualmente:</p> <p>a) En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de sus respectivos cargos, dirigidas contra el Presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma y contra los miembros de la Asamblea legislativa, cuando tal atribución no corresponda, según los Estatutos de Autonomía, al Tribunal Supremo.</p> <p>b) En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo, contra todos o la mayor parte de los magistrados de una Audiencia Provincial o de cualesquiera de sus secciones.</p> <p>c) De las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma que no tenga otro superior común.</p> <p>3. Como Sala de lo Penal, corresponde a esta Sala:</p> <p>a) El conocimiento de las causas penales que los Estatutos de Autonomía reservan al conocimiento de los Tribunales Superiores de Justicia.</p> <p>b) La instrucción y el fallo de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la comunidad autónoma, siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo.</p> <p>c) El conocimiento de los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales, así como el de todos aquellos previstos por las leyes.</p> <p>d) La decisión de las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden penal con sede en la comunidad autónoma que no tengan otro superior común.</p> <p>(...)</p>	<p>atribución.</p> <p>b) Del recurso extraordinario de revisión que establezca la ley contra sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma, en materia de derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad autónoma, si el correspondiente Estatuto de Autonomía ha previsto esta atribución.</p> <p>c) De las funciones de apoyo y control del arbitraje que se establezcan en la ley, así como de las peticiones de exequátur de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados o las normas de la Unión Europea, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal.</p> <p>2. Esta Sala conocerá igualmente:</p> <p>a) En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de sus respectivos cargos, dirigidas contra el Presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma y contra los miembros de la Asamblea legislativa, cuando tal atribución no corresponda, según los Estatutos de Autonomía, al Tribunal Supremo.</p> <p>b) En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo, contra todos o la mayor parte de los magistrados de una Audiencia Provincial o de cualesquiera de sus secciones.</p> <p>c) De las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma que no tenga otro superior común.</p> <p>3. Como Sala de lo Penal, corresponde a esta Sala:</p> <p>a) El conocimiento de las causas penales que los Estatutos de Autonomía reservan al conocimiento de los Tribunales Superiores de Justicia.</p> <p>b) La instrucción y el fallo de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la comunidad autónoma, siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo.</p> <p>c) El conocimiento de los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Audiencias</p>
--	--	--

		<p>Provinciales, así como el de todos aquellos previstos por las leyes.</p> <p>d) La decisión de las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden penal con sede en la comunidad autónoma que no tengan otro superior común.</p> <p><b>e) De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.</b></p> <p>(...)</p>
<p><b>Cuatro.</b> <i>Cuatro. Se modifica el párrafo segundo del numeral 2.º y se añade un nuevo numeral 6.º al apartado 1 del artículo 82, que quedan redactados como sigue:</i></p>	<p><b>Artículo 82.</b></p> <p>1. Las Audiencias Provinciales conocerán en el orden penal:</p> <p>1.º De las causas por delito, a excepción de los que la Ley atribuye al conocimiento de los Juzgados de lo Penal o de otros Tribunales previstos en esta Ley.</p> <p>2.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Instrucción y de lo Penal de la provincia.</p> <p>Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los Juzgados de Instrucción en juicio <u>de faltas</u> la <u>audiencia</u> se constituirá con un solo Magistrado, mediante un turno de reparto.</p> <p>3.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones en materia penal dictadas por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia. A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse una o varias de sus secciones de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la presente Ley Orgánica. Esta especialización se extenderá a aquellos supuestos en que corresponda a la Audiencia Provincial el enjuiciamiento en primera instancia de asuntos instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia.</p> <p>4.º Las Audiencias Provinciales conocerán también de los recursos contra las resoluciones de los Juzgados de Menores con sede en la provincia y de las cuestiones de competencia entre los mismos.</p> <p>5.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, cuando la competencia no corresponda a la Sala de lo</p>	<p><b>Artículo 82</b></p> <p>1. Las Audiencias Provinciales conocerán en el orden penal:</p> <p>1.º De las causas por delito, a excepción de los que la Ley atribuye al conocimiento de los Juzgados de lo Penal o de otros Tribunales previstos en esta Ley.</p> <p>2.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Instrucción y de lo Penal de la provincia.</p> <p>Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los Juzgados de Instrucción en juicios <b>por delitos leves</b> la <b>Audiencia</b> se constituirá con un solo Magistrado, mediante un turno de reparto.</p> <p>3.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones en materia penal dictadas por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia. A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse una o varias de sus secciones de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la presente Ley Orgánica. Esta especialización se extenderá a aquellos supuestos en que corresponda a la Audiencia Provincial el enjuiciamiento en primera instancia de asuntos instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia.</p> <p>4.º Las Audiencias Provinciales conocerán también de los recursos contra las resoluciones de los Juzgados de Menores con sede en la provincia y de las cuestiones de competencia entre los mismos.</p> <p>5.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, cuando la competencia no corresponda a la Sala de lo</p>

	<p>Penal de la Audiencia Nacional.</p> <p>(...)</p>	<p>Penal de la Audiencia Nacional.</p> <p><b>6.º De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.</b></p> <p>(...)</p>
<p><b>Cinco.</b> Se modifica la letra b) y se añade una nueva letra h) al apartado 1 del artículo 87, que quedan redactadas como sigue:</p>	<p><b>Artículo 87</b></p> <p>1. Los Juzgados de Instrucción conocerán, en el orden penal:</p> <p>a) De la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a las Audiencias Provinciales y a los Juzgados de lo Penal, excepto de aquellas causas que sean competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.</p> <p>b) Les corresponde asimismo dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la Ley.</p> <p>c) Del conocimiento y fallo de los juicios de faltas, salvo los que sean competencia de los Jueces de Paz, o de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.</p> <p>d) De los procedimientos de "habeas corpus".</p> <p>e) De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Paz del partido y de las cuestiones de competencia entre éstos.</p> <p>f) De la adopción de la orden de protección a las víctimas de violencia sobre la mujer cuando esté desarrollando funciones de guardia, siempre que no pueda ser adoptada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.</p> <p>g) De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.</p> <p>(...)</p>	<p><b>Artículo 87</b></p> <p>1. Los Juzgados de Instrucción conocerán, en el orden penal:</p> <p>a) De la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a las Audiencias Provinciales y a los Juzgados de lo Penal, excepto de aquellas causas que sean competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.</p> <p>b) Les corresponde asimismo dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la Ley <b>y en los procesos por aceptación de decreto.</b></p> <p>c) Del conocimiento y fallo de los juicios de faltas, salvo los que sean competencia de los Jueces de Paz, o de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.</p> <p>d) De los procedimientos de "habeas corpus".</p> <p>e) De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Paz del partido y de las cuestiones de competencia entre éstos.</p> <p>f) De la adopción de la orden de protección a las víctimas de violencia sobre la mujer cuando esté desarrollando funciones de guardia, siempre que no pueda ser adoptada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.</p> <p>g) De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.</p> <p><b>h) De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.</b></p> <p>(...)</p>
<p><b>Seis.</b> Seis. Se modifica el apartado 2 del artículo 89 bis que queda redactado</p>	<p><b>Artículo 89 bis.</b></p> <p>(...)</p>	<p><b>Artículo 89 bis</b></p> <p>(...)</p>

<p><i>como sigue:</i></p>	<p>2. Los Juzgados de lo Penal enjuiciarán las causas por delito que la ley determine.</p> <p>A fin de facilitar el conocimiento de los asuntos instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse uno o varios Juzgados en cada provincia, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la presente Ley.</p> <p>Corresponde asimismo a los Juzgados de lo Penal la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito por los Juzgados de Instrucción, y el reconocimiento y ejecución de las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias transmitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, cuando las mismas deban cumplirse en territorio español.</p> <p>(...)</p>	<p>2. Los Juzgados de lo Penal enjuiciarán las causas por delito que la ley determine.</p> <p>A fin de facilitar el conocimiento de los asuntos instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse uno o varios Juzgados en cada provincia, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la presente Ley.</p> <p>Corresponde asimismo a los Juzgados de lo Penal la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito <b>grave o menos grave</b> por los Juzgados de Instrucción, el reconocimiento y ejecución de las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias transmitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, cuando las mismas deban cumplirse en territorio español, <b>y los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.</b></p> <p>(...)</p>
<p><b>Siete.</b> <i>Se modifica el apartado 3 del artículo 89 bis que queda redactado como sigue:</i></p>	<p><b>Artículo 89 bis</b></p> <p>(...)</p> <p>3. En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios Juzgados Centrales de lo Penal que conocerán, en los casos en que así lo establezcan las leyes procesales, de las causas por los delitos a que se refiere el artículo 65 y de los demás asuntos que señalen las leyes.</p> <p>Corresponde asimismo a los Juzgados Centrales de lo Penal la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito por los Juzgados Centrales de Instrucción.</p>	<p><b>Artículo 89 bis</b></p> <p>(...)</p> <p>3. En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios Juzgados Centrales de lo Penal que conocerán, en los casos en que así lo establezcan las leyes procesales, de las causas por los delitos a que se refiere el artículo 65 y de los demás asuntos que señalen las leyes.</p> <p>Corresponde asimismo a los Juzgados Centrales de lo Penal la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito <b>grave o menos grave</b> por los Juzgados Centrales de Instrucción, <b>y los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.</b></p>